

proletaris de tots
els països: uniu-vos!

treball

òrgan central del
Partit Socialista Unificat de Catalunya

Versión en castellano del nº 372

Barcelona 31 Julio 1973

Los pueblos de España harán saltar el inmovilismo continuista que preconiza Carrero Blanco.

El pasado 20 de julio el Almirante Carrero Blanco explicó en Las Cortes el significado de su nombramiento como Presidente del Consejo de Ministros y la política del nuevo Gobierno.

El "cerebro gris" del dictador tuvo en esta ocasión la virtud de la claridad, pues no dejó lugar a dudas respecto a que tanto su designación presidencial como el programa de su equipo gubernamental tienen como fin CONTINUAR, entendiendo esta expresión como decisión de conservar el régimen político franquista sin otros cambios ni transformaciones que los exigidos por su depuración y perfeccionamiento. Y ello, claro está, al margen de las necesidades del país y de los deseos de los españoles, partiendo exclusivamente de la voluntad de Franco, de los Principios del Movimiento Nacional (que el Almirante considera "permanentes e inalterables") y de las Leyes Fundamentales del Reino.

Franco le nombró Presidente del Consejo -dice Carrero- "para dejarlo todo atado y bien atado", y esta decisión pone remate -según él- al proceso institucional franquista. "Al poner ahora -afirma- en totalidad de funcionamiento todas las instituciones que normalmente han de funcionar al cumplirse las previsiones sucesorias, es cuando culmina la obra política del Caudillo"

El párrafo expresa la preocupación existente en las alturas por amortiguar la crisis que inevitablemente comportaría la sucesión, y muestra que es Carrero quien trata de dejarlo todo atado y bien atado en vida de Franco, de modo que cuando éste muera nadie pueda proponer cambios ni disputarle el poder sin violar la "última voluntad" del dictador.

Esta preocupación del Almirante refleja la lucha existente entre las camarillas gobernantes por asegurarse posiciones ventajosas con vistas al postfranquismo, y está especialmente dirigida contra los que esperan o creen que la ascensión de Juan Carlos a la Jefatura del Estado entrañará la iniciación de una apertura o evolución hacia la democracia.

Carrero no puede disimular su desconfianza en el Príncipe incluso cuando expresa su lealtad al mismo, que explica "como consecuencia lógica de esta identificación mía con la obra política del Caudillo". El Almirante recuerda en su discurso que Juan Carlos, al aceptar la sucesión, juró "lealtad a su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino... quedando claro ante propios y extraños... que esta Monarquía... es una monarquía nueva: es la Monarquía del Movimiento Nacional". Finalmente Carrero concluye: "Y a esta monarquía y a la persona del Príncipe de España que ha de ser un día -que Dios quiera esté muy lejano- su primer monarca, es a la que declaro mi total y absoluta lealtad".

Carrero habló después de "el futuro inmediato que el Gobierno tiene marcado en los cinco años de su normal funcionamiento institucional", cortando así las especulaciones de que se ha hecho eco la prensa sobre la posibilidad de que Juan Carlos, al asumir la Jefatura del Estado, nombre otro Presidente del Consejo.

El Almirante intentó dejar sentado que si Juan Carlos es el sucesor designado por Franco para la Jefatura del Estado, él, Carrero, es el heredero político del dictador. Pero advirtió claramente que el papel de arbitraje que Franco cumplió hasta aquí entre las fuerzas políticas y sociales que sostienen el régimen -y que le llevaron a incluir en el Gobierno no sólo a militantes falangistas, sino también a ministros que representan de forma oficiosa al OPUS, a la Asociación Católica de Propagandistas o a los grupos tradicionalistas- él lo cumplirá en los marcos y límites estrictos del Movimiento.

Carrero se definió en su discurso como "un hombre del Movimiento Nacional", cuyos principios son -según él- los cimientos del sistema político español. El Movimiento Nacional -dice-, admite "matices, sectores, grupos, o lo que se ha llamado en llamar familias políticas", pero fuera de él no encuentra legal ni admisible ninguna forma de actividad política. El Movimiento -afirmó- ha de poner el acento "en la participación de todos los españoles" sobre la base de los cinco principios siguientes:

- 1.- "Aceptación del ideario que basa el Movimiento como comunión".
- 2.- "Fidelidad a los Principios que señalan la verdadera dinámica y finalidad de todo nuestro sistema."
- 3.- "Aceptación de las instituciones que establecen nuestras leyes fundamentales".
- 4.- "Lealtad al Jefe del Estado, al Caudillo de nuestra guerra y de nuestra paz, y desde esa lealtad, lealtad al Rey de las previsiones sucesorias, y
- 5.- "Juego limpio en el marco de la legalidad constitucional, del Estado de Derecho establecido por nuestras leyes fundamentales".

Y por si no estuviese aún suficientemente claro que no hay más política legal que la suya, Carrero agregó a continuación: "no aceptamos las interpretaciones subjetivas que de nuestro régimen hacen o pueden hacer determinados individuos; sólo aceptamos la interpretación institucional".

De este modo el Almirante dijo a los Ortí Bordas, Fraga Iribarne, Cantarero del Castillo y demás "liberales" del sistema, que las especulaciones sobre las asociaciones políticas y sobre posibles aperturas a partir de la legalidad actual no tienen sentido ni futuro, y que todo el que intente cambiar algo habrá de pasar previamente por encima de su cadáver. Estas limitaciones, que reducen a la incondicionalidad las posibilidades de participación política, aislan aún más al núcleo de poder que Franco y Carrero representan.

Las advertencias del Presidente del Gobierno no detendrán el proceso de descomposición del sistema dictatorial franquista, cuya creciente debilidad tiene por causa principal las necesidades objetivas del desarrollo del país y la voluntad de los pueblos de España de establecer un régimen político que sea la expresión de su soberanía.

Las partes del discurso de Carrero que se refieren al programa del Gobierno en el terreno cultural y económico-social no tienen el menor interés, pues se limitan a repetir generalidades que se conjugan perfectamente con el carácter inmovilista del programa político del mismo.

Llama la atención que en el primero de dichos capítulos Carrero no habló de la enseñanza general gratuita como un objetivo gubernamental, lo que puede suponer el abandono de la principal promesa contenida en la Ley General de Educación.

Al referirse a las relaciones laborales no anunció ningún cambio, ni siquiera respecto de la contratación colectiva, las garantías para los cargos sindicales, la abolición del

despido libre mediante indemnización y otras reivindicaciones obreras que hasta los propios jefes verticalistas dicen apoyar.

Carrero dedicó, sin embargo, atención especial a explicar que las empresas estatales están y estarán al servicio de las privadas, para facilitar e impulsar el desarrollo de éstas. Y aunque al hablar de los beneficios del desarrollo aludió a la necesidad de reparar mejor el pastel, afirmó cínicamente que "el problema de la distribución de la Renta ha perdido su antiguo y patético dramatismo".

El párrafo del discurso dedicado a las Fuerzas Armadas incluye una promesa de modernización de las mismas y la afirmación de que "deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria". Ello puede significar que el Gobierno se propone dar satisfacción a algunas de las reivindicaciones de los militares, por lo que es más necesario aún que la oposición realice una labor permanente de acercamiento hacia el Ejército, dirigida a hacer imposible que el régimen pueda utilizarlo como una fuerza de policía contra el pueblo.

La tirantez existente entre la Iglesia y el Estado franquista se confirmó en el discurso del Almirante, que incluye una conminación a la Santa Sede a renovar y revisar el Concordato existente en la actualidad. Como es sabido, la jerarquía eclesiástica española y el Vaticano rechazan desde hace tiempo esta oferta debido a que no quieren mantener las actuales servidumbres de la Iglesia respecto de la dictadura.

En el capítulo que trata de la política exterior, Carrero detalló las seis directrices generales contenidas en la Declaración Ministerial (1: Paz mundial; 2: Relaciones con todos los países; 3: Relaciones preferenciales con Iberoamérica; 4: Relaciones estrechas con Portugal y EE.UU.; 5: Relaciones amistosas con los países árabes; 6: Ayuda a los países atrasados), y sólo después se refirió a Europa.

Hablando del Mercado Común el Presidente del Gobierno afirmó que "España no puede estar ausente del proceso de perfeccionamiento de las instituciones integradoras entre los pueblos de nuestro Continente". Pero calló que para estar presente en dicho proceso España deberá tener libertades sindicales y políticas y liquidar el actual sistema fascista de poder (causa del rechazo de la CEE a la demanda de conversaciones para la asociación hecha por el Gobierno del General Franco hace más de diez años), se lamentó de la "campana que llevan a cabo en contra de España determinados sectores del mundo europeo" y afirmó que el Gobierno procurará eliminar las "incomprensiones y recelos hasta llevar al ánimo de todos los hombres de buena voluntad de Europa la razón y las razones de nuestra Patria".

Ello entraña renunciar en la práctica al ingreso de España en el Mercado Común y el deslizamiento hacia una situación de creciente desventaja para nuestros intercambios comerciales con los países de la CEE, que suministran la mitad de nuestras importaciones y que compran una parte considerable de nuestras exportaciones.

El Almirante habló, por último, de la Conferencia de Seguridad Europea y de Gibraltar. Sobre esta última cuestión confirmó involuntariamente lo que todos suponíamos: que la reciente ruptura de las conversaciones con Inglaterra sobre el Peñón es un gesto propagandístico gratuito y aventurero, que no se acompaña de ningún plan de acción que permita esperar un cambio de la actitud inglesa.

Hay que decir que si Inglaterra mantiene todavía su dominio sobre Gibraltar, después de abandonar la casi totalidad de sus colonias y cuando está llegando a su fin la descolonización en el mundo, ello se debe a que en España hay un régimen fascista universalmente odiado. Si en España hubiese un Gobierno democrático, los pueblos del mundo entero, incluido el inglés, apoyarían la justa reivindicación española y Gibraltar se reintegraría a nuestro país.

